

2158058



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

RESOLUCIÓN No. 5288

"POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

EL DIRECTOR DE CONTROL AMBIENTAL DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de las facultades delegadas mediante la Resolución No. 3074 del 26 de Mayo de 2011, la Ley 1333 de 2009, en concordancia con lo establecido en el Decreto Distrital 109 del 16 de Marzo de 2009, modificado por el Decreto Distrital 175 del 4 de Mayo de 2009, el Acuerdo Distrital 257 del 30 de Noviembre de 2006, conforme a la Ley 99 de 1993, el Decreto 1594 de 1984, y

CONSIDERANDO

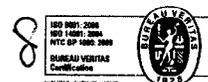
ANTECEDENTES

Que mediante queja remitida por la Coordinadora de Grupo de Quejas y Reclamos del Ministerio del Medio Ambiente, radicada en el DAMA bajo el número 29476 del 01 de diciembre de 1999, la señora MARGARITA MARÍA CORTÉS L y otros, denunciaron la tala por parte de la señora **ROSALBA GÚZMAN DE ESPINOZA**, de dos (02) siete cueros, tres (03) callenos, una (01) araucaria, una (01) palma y un (01) geranio, en la zona verde ubicada en la Carrera 81 entre Diagonal 84F y 85.

Que la Subdirección de Calidad Ambiental en desarrollo de la visita al lugar de ubicación de los árboles objeto de la queja emitió el Informe Técnico No. 7378 de 20 de diciembre de 1999, según el cual: *"...no aparecen tocones, los presuntos árboles tumbados están en espacio público, la queja de la señora MARGARITA MARÍA CORTÉS L por lo tanto no fue demostrada."*

Que la Unidad Legal Ambiental solicitó la aclaración del citado Informe Técnico y en respuesta a ésta, la Subdirección de Calidad Ambiental emitió el Memorando 1103 del 05 de abril de 2000 según el cual: *"...esta Subdirección llevó a cabo la visita al predio ubicado en la Carrera 81 entre Diagonales 84F y 85 donde no fue posible evidenciar tocones de dos (02) siete cueros, tres (03) callenos, una (01) araucaria, una (01) palma y un (01) geranio..."*

Que en virtud de lo anterior, la Unidad Legal mediante oficio SJ ULA 08114 del 11 de abril de 2000 solicitó a la señora MARGARITA MARÍA CORTÉS L su colaboración en aras de esclarecer los hechos denunciados y continuar con la investigación si a ello hubiere lugar.



Que mediante queja radicada en el DAMA bajo el número 26755 del 28 de octubre de 1999, la señora MARGARITA MARÍA CORTÉS L y otros elevaron ante este Departamento la queja relacionada en el primer considerando de este proveído.

Que mediante escrito radicado en el DAMA bajo el número 26469 de 26 de octubre de 1999, la señora **ROSALBA GÚZMAN DE ESPINOZA**, solicitó permiso para levantar un prado ubicado frente a su casa en la Diagonal 84F No. 81-90.

Que la Subdirección de Calidad Ambiental en desarrollo de la anterior queja y solicitud emitió los Conceptos Técnicos No. 7005 de 06 de diciembre de 1999 según el cual consideró técnicamente viable la tala de diecinueve (19) árboles localizados en zona de espacio público, el 6959 de 06 de diciembre de 1999, según el cual cuando se practicó visita, la señora **ROSALBA GÚZMAN DE ESPINOZA**, ya había realizado la explanación de 50 metros cuadrados. Por tratarse, de espacio público, la presente solicitud se remitió al IDU para el trámite pertinente, y el 7270 del 10 de diciembre de 1999, según el cual se verificó la tala de dos (02) árboles de la especie guayacán y dos (02) árboles de la especie chicalá localizados en el parque diagonales 84F y 85, así mismo se evidenció invasión del área verde sobre la Carrera 81ª con escombros de construcción y tierra negra.

Que con oficio SJ QR 4968 del 03 de marzo de 2000, esta Subdirección informó a la señora MARGARITA MARÍA CORTÉS L la legitimación para la formulación de cargos contra la señora **ROSALBA GÚZMAN DE ESPINOZA**, por la tala sin autorización de siete (07) árboles localizados en la Carrera con diagonales 84F y 85.

Que con oficio SJ QR 4969 del 03 de marzo de 2000, esta Subdirección informo a la señora **ROSALBA GÚZMAN DE ESPINOZA** que se dio traslado de su solicitud de tala de árboles al IDU por encontrarse en espacio público y ser esta la entidad competente.

Que con oficio SJ QR 4967 del 03 de marzo de 2000, esta Subdirección remitió al Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- la queja para que adopte las medidas que considere pertinentes conforme a su competencia.

Que mediante Auto No. 131 de 03 de marzo de 2000, esta Subdirección formuló a la señora **ROSALBA GÚZMAN DE ESPINOZA**, residente en la Diagonal 84F No. 81-90 por la tala sin previo permiso de la autoridad ambiental de dos (02) siete cueros, tres (03) callenos, una (01) araucaria, una (01) palma y un (01) geranio ubicados en la zona verde de la Carrera 81 con diagonales 84F y 85.

Que mediante Auto No. 283 de 09 de mayo de 2000 se ordena la acumulación del Expediente 474/2000 C al Expediente 65/2000 C, y se modifica el artículo primero del



Auto No. 131 de 03 de marzo de 2000 así: Formular cargos a la señora **ROSALBA GÚZMAN DE ESPINOZA**, por la tala sin previo permiso de la autoridad ambiental de cuatro (04) árboles discriminados así: dos (02) de la especie guayacán y dos (02) de la especie chicalá, ubicados en la zona verde de la carrera 81 con diagonales 84F y 85.

Que el Auto No. 283 de 09 de mayo de 2000 fue notificado por edicto, el cual fue fijado el día 29 de mayo de 2000 y desfijado el día 12 de junio de 2000, quedando debidamente ejecutoriado el día 20 de junio de 2000.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Que de conformidad con las disposiciones Constitucionales en especial, las señaladas en el artículo 80, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, en concordancia con el artículo 79 Ibídem, que contempla el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y establece para el Estado, entre otros, el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente.

Que el artículo 80 Constitucional, le asigna al Estado el imperativo de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, generando desarrollo sostenible, conservación y restauración o sustitución de estos. Atribuye también como responsabilidad estatal la prevención y control de agentes de deterioro ambiental, y que en cuyo caso, se configura la potestad sancionatoria como un mecanismo de protección frente al quebrantamiento de normas ambientales, y que consecuentemente hace exigible el resarcimiento de los daños originados.

Que de acuerdo con las disposiciones Constitucionales, nace para el Estado, la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación y la diversidad e integridad del ambiente, por cuanto, la carta política de Colombia, prevé el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano, correspondiéndole planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales, y exigir la reparación de los daños causados.

Que el régimen sancionador, encuentra fundamento constitucional en el artículo 29 de la Constitución Política, que dispone la aplicación a toda clase de actuaciones administrativas, del debido proceso, en virtud del cual, "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio", y



el desarrollo de la función administrativa conforme a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que adicionalmente, dentro de las garantías constitucionales del debido proceso sancionador, cobran especial importancia los principios de igualdad, celeridad y caducidad de la acción, que imponen a la administración, el deber de actuar diligentemente y preservar las garantías de quienes resultan investigados; es así como, la caducidad tiene por objeto, fijar un límite en el tiempo para el ejercicio de ciertas acciones, en protección de la seguridad jurídica y el interés general.

Que de otra parte la Ley 1333 de 2009, establece en el artículo 64 que: "... Los procesos sancionatorios ambientales en los que se hayan formulado cargos al entrar en vigencia la presente ley, continuarán hasta su culminación con el procedimiento del Decreto 1594 de 1984."

Que el Decreto 1594 de 1984, define el proceso sancionatorio en los artículos 197 y siguientes, no obstante dicho régimen no contiene la figura de la caducidad administrativa, razón por la cual y, frente al vacío de la norma, nos remitimos a lo dispuesto en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, el cual establece que: "Salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que pueda ocasionarlas."

Que sobre esta materia, vale la pena recalcar la posición del H. Consejo de Estado, Sección Primera, expediente 4438, MP. Doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, frente a la caducidad relacionada con el hecho puntual en el tiempo y el transcurso del mismo por más de los tres (3) años a que se refiere el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

(...) "Aquel fenómeno jurídico que limita en el tiempo el ejercicio de una acción, independientemente de consideraciones que no sean solo el transcurso del tiempo; su verificación es simple, pues el término ni se interrumpe ni se prorroga y es la Ley que al señalar el término y el momento de su instalación, precisa el término final e invariable, debe interpretarse que teniendo en cuenta las normas que dicta el Legislador deben producir los efectos en ellas previstos, y en tal sentido, cuando se hace referencia a la caducidad de la acción prevé el ejercicio de la autoridad administrativa en la medida que también produzca efectos en derecho, es decir, mediante la expedición dentro del término de tres años previsto de manera general en la norma " (...).



Al respecto, el H. Consejo de Estado, reiteró su posición, mediante providencia del 23 de junio de 2000, expediente 9884, Magistrado ponente Dr. Julio E. Correa Restrepo, donde se precisó:

"(...) Pues bien, el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, norma aplicable al presente caso, es claro en disponer que salvo disposición especial en contrario, la facultad que tienen las autoridades administrativas para imponer sanciones caduca a los tres (3) años de producido el acto que puede ocasionarlas, **por lo tanto el término se debe contar a partir del momento en que se produce el hecho infractor.**" (...) Resaltado fuera del texto original.

Que respecto al término establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo, se han expuesto tres tesis en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., impartió directrices a las entidades y organismos Distritales, a través de la Directiva No. 007 de noviembre 09 de 2007, en la que señaló lo siguiente:

(...) "Como se observa, han sido diversas las tesis expuestas en relación con el tema objeto de este documento, sin que hasta la fecha se haya generado una única línea jurisprudencial, razón por la cual se hace necesario impartir las siguientes instrucciones en cuanto al término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración: " (...) *Teniendo en cuenta que no existe una posición unificada de la Jurisdicción Contencioso Administrativa frente a la interrupción del término de caducidad de la facultad sancionatoria de la administración, y que la administración debe acatar el criterio que desde el punto de vista del análisis judicial genere el menor riesgo al momento de contabilizar dicho término, se recomienda a las entidades Distritales que adelanten actuaciones administrativas tendientes a imponer una sanción, que acojan en dichos procesos la tesis restrictiva expuesta por el Consejo de Estado, es decir, aquella que indica que dentro del término de tres años señalado en la norma en comento, la administración debe expedir el acto principal, notificarlo y agotar la vía gubernativa⁶..." (Subrayado fuera de texto).

Que así las cosas y, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 del Código Contencioso Administrativo y, las instrucciones impartidas a través de la Directiva No. 007 de 2007 expedida por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se deduce que la administración, para el caso en concreto, disponía de un término de 3 años contados a partir de la fecha en que la administración conoció los hechos que dieron origen a la presente actuación esto es, el día 01 de diciembre de 1999, donde se denunció la tala sin autorización, para la expedición del acto administrativo de sanción, su notificación y debida ejecutoria, trámite que no se surtió, operando de esta manera el fenómeno de la caducidad.



Que, siendo la caducidad, una institución de orden público, a través de la cual el legislador establece un plazo máximo para el ejercicio de la facultad sancionadora de la administración, que tiene como finalidad armonizar dicha potestad con los derechos constitucionales de los administrados, no hay duda, que su declaración proceda de oficio, por cuanto, al continuar el proceso, este culminaría con un acto viciado de nulidad, por falta de competencia temporal de la autoridad que lo emite.

En igual sentido, el Doctrinante Luis Alfonso Acevedo Prada, en su obra "Caducidad, Prescripción, Perención, Preclusión y Términos" Primera edición 2004, expresó al respecto de la caducidad lo siguiente:

(...) "Ahora bien, en la caducidad ocurre que proceden sus efectos ope legis o de pleno derecho, sin necesidad de que el interesado en beneficio de sus efectos la alegue o proponga como defensa exceptiva. El funcionario competente en el juzgamiento pertinente, no solo debe sino que está obligado a declararla sin necesidad de petición de parte" (...)

Que, de otro lado, si bien es cierto la señora **ROSALBA GÚZMAN DE ESPINOZA**, aparece como presunta contraventora, también es cierto que al no declararse responsable ni imponérsele una sanción, fue imposible desvirtuar o confirmar con certeza dicha condición.

Que la jurisprudencia en materia del Debido Proceso Administrativo ha venido desarrollando de manera minuciosa las directrices que enmarcan su contenido y aplicación en los siguientes términos:

"...El artículo 29 de la Carta Política dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de la administración pública."

Que el debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, contrarios a los principios del Estado de derecho.

Ello en virtud de que *"toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes..."*



"De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio". (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-1341 del 11 de diciembre de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis).).

"El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad que tiene el administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelanta e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le sean adversas a sus intereses. La administración debe garantizar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca dicha garantía es contraria a la Constitución.

En efecto, si el administrado no está de acuerdo con una decisión de la administración que le afecte sus intereses tiene derecho a ejercer los recursos correspondientes con el fin de obtener que se revoque o modifique. (Corte Constitucional, Sentencia 1021 de 2002)".

Que en aras de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa, es importante precisar que no es viable exigir el pago de la compensación a que hace referencia el Concepto Técnico No. 7270 de 10 de diciembre de 1999, obrante dentro del expediente, al no haberse podido establecer con certeza la responsabilidad por parte de la señora **ROSALBA GUZMAN DE ESPINOZA**.

Que a través del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 2006, mediante el cual se modificó la Estructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá y se transformó el Departamento Técnico Administrativo de Medio Ambiente - DAMA, en la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA-, se le asignó entre otras funciones, la de ejecutar el control y vigilancia del cumplimiento de las normas de protección ambiental y manejo de recursos naturales e implementar las acciones de policía que sean pertinentes para el efecto.

Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 109 de 2009, modificado por el Decreto 175 de 2009, por medio del cual se modifica la estructura de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, y la Resolución No. 3074 del 26 de Mayo de 2011, corresponde al Director de Control Ambiental expedir todos los actos administrativos de archivo, caducidad, pérdida de fuerza ejecutoria, revocatoria directa y todos aquellos análogos a una situación administrativa semejante a las citadas.

En mérito de lo expuesto,





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

Nº 5 2 8 8

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la caducidad de la facultad sancionatoria dentro del proceso iniciado en el expediente **DM-08-00-65**, por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA-, contra la señora **ROSALBA GUZMAN DE ESPINOZA**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto.

ARTÍCULO SEGUNDO: Archivar las presentes diligencias, como consecuencia de lo previsto en el artículo primero de la presente providencia, y se retire el Expediente **DM-08-00-65** de la base de datos de expedientes activos.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente providencia a la señora **ROSALBA GÚZMAN DE ESPINOZA**, en la Diagonal 84F No. 81-79, de esta ciudad.

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la presente Resolución a la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre, de esta Secretaría para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO: Publicar la presente Resolución en el boletín ambiental. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Enviar copia de la presente Resolución a la Subsecretaria General y de Control Disciplinario de esta Secretaría Distrital de Ambiente –SDA-, para lo de su competencia.

ARTÍCULO SÉPTIMO: Contra la presente providencia no procede recurso alguno conforme lo establecido en el Artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., a los 13 SEP 2011

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Director de Control Ambiental

Proyectó.- Dra. Rosana Lorena Romero Angarita
Revisó.- Dr. Oscar Tolosa
Aprobó.- Dra. Diana Patricia Ríos García
Expediente **DM-08-00-65**





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE AMBIENTE

**EDICTO
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL
HACE SABER**

Que dentro del expediente No. 08-2000-65 Se ha proferido la "RESOLUCIÓN No. 5288 cuyo encabezamiento y parte resolutive dice: **POR LA CUAL SE DECLARA LA CADUCIDAD DE LA FACULTAD SANCIONATORIA Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES.**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

CONSIDERANDO

(...)

RESUELVE:

ANEXO RESOLUCIÓN

NOTIFIQUESE ,PUBLIQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá, D.C., a los 13 de Septiembre de 2011

FIJACIÓN

Para notificar al señor(a) y/o **ROSALBA GUZMAN DE ESPINOZA**. Se fija el presente edicto en lugar visible de la entidad, hoy **VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2011**, siendo las 8:00 a.m., por el término de diez (10) días hábiles, en cumplimiento del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo y artículo 18 de la ley 1333 de 2009.

DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Secretaría Distrital de Ambiente

DESFIJACION 09 DIC. 2011

Y se desfija el _____ de 2011 siendo las 5:30 p.m. vencido el término legal.

Katherine Leuz
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Secretaría Distrital de Ambiente

